EL PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO SUPREMO-

La Cámara se prepara

Mientras pequeños detalles no dejan duda acerca de que la Cámara Federal de Apelaciones de esta capital se dispone decididamente a tomar la resolución de cerrar una etapa en el procesamiento a los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares, continúa abierta a todo tipo de comentarios la profunda conmoción que causó el informe que envió el martes pasado el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, sobre todo por algunos de sus párrafos.

Entre los signos de que la Cámara tomará a su cargo esa causa de conformidad con lo que le impone en ese sentido la ley 23.049, en la última parte de su artículo 10°, se encuentra el hecho de que se han contratado seis colaboradores (uno por cada camarista) que secundarán a los magistrados en esta labor únicamente.

Han sido contratados por dos meses, con opción a más tiempo y con la autorización de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta no solamente la pesada tarea que les aguarda sino que, como es natural, la Cámara seguirá atendiendo normalmente todas las causas que lleguen a su poder.

También se procedió a habilitar prácticamente el sitio en el que a partir de hoy o desde el lunes, cuando los envíe el organismo militar, se guardarán con las medidas de seguridad adecuadas todos los legajos sobre lo actuado hasta ahora por el organismo castrense.

Se trata de la dependencia ocupada habitualmente por una de las dos salas en que se divide la Cámara, con el objeto de que cuando comience el trabajo los expedientes se encuentren a mano. Esa decisión, a la vez, sugiere que la Cámara decidiría tomar en pleno la causa, como lo permite la citada ley y el reglamento que para estos casos el mismo cuerpo se dio (ver Clarin, 9-9-84). Habitualmente, cada sala toma por separado las causas.

En estos casos, también hará lo mismo "salvo que, por el número de procesados, la gravedad del caso o la cantidad de hechos incluidos en el proceso, decidiera actuar en pleno", como resulta probable lo haga, en vista de que se presentan varias de las condiciones exigidas.

También es bueno recordar el artículo 7º del reglamento: "Cuando el tribunal asuma el conocimiento del proceso por aplicación de lo previsto en el art. 10, última parte de la ley 23.049, continuará el trámite de acuerdo a las disposiciones que correspondieren del Código de Justicia Militar", comentado en su oportunidad.

si oler lo seralado indica el propósito de carerse carer la sa, ambién debe tenerse en ruenta que, en podo ceso, las mentas baras ica o richadas, puesto que trant por una expresa proteción en como suceder la como una expresa proteción en la como suceder la como una prefación podos los en la carerse de la Comisión Argentina para y el que minute en la lucha antimureral y el este de selembre de 18 civil dos y Migrantesa ocurridos en la Capital Federal), deben pasar por sus manos, obligatoriamente.

Para muchos magistrados, la respuesta del Consejo "no le deja otra alternativa" y con el cambio de
actitud ha quedado demostrado, como lo decían rumores anteriores, que sus integrantes preferían no juzgar
a sus camaradas. Se preguntaban al respecto por qué
motivo "aceptaron sin reserva alguna" en su momento
cumplir con la orden recibida por el decreto Nº 158 del
presidente Raúl Alfonsín, o por qué "no manifestaron
discrepancia" con la Cámara cuando en julio y agosto,
tras tomar nota de la marcha de la investigación, reiteró la posibilidad de dictar estimativamente sentencia hacia el 11 de octubre, para hacerlo recién ahora.

También hay quienes quieren ver en el informe una redacción "propia de quien conoce a fondo el Derecho" y se remiten, señalan, al texto del decreto Nº 158 y la resolución del mismo Consejo por la que dictó la prisión preventiva rigurosa al general Videla, siete meses y medio después de haber comenzado el sumario y casi uno después de haber ordenado las



El ex presidente Jorge Rafael Videla

indagatorias la Cámara, tras haber recibido ésta el primero de los informes castrenses.

Según trascendió por entonces, Videia asumió "la total responsabilidad" por lo ocurrido en las zonas y subzonas en que actuó el Ejército, pero como comandante en jefe del arma y no como integrante de la Junta Militar. En cuanto al decreto, en sus considerandos señaló que tanto la primera Junta "y los mandos orgánicos que se encontraban en funciones a esa fecha concibieron e instrumentaron un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales", por lo que ordenaba juzgarios.

Claudio Andrada